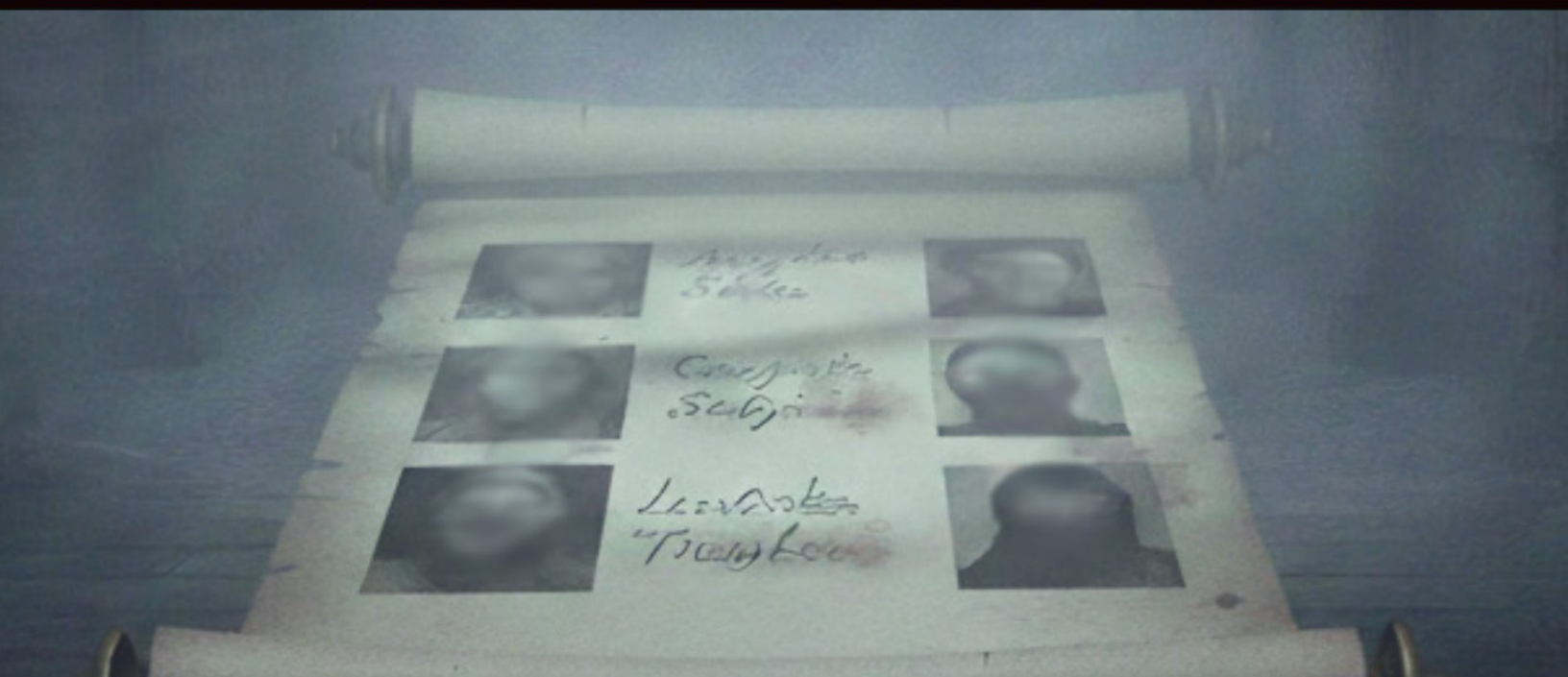


panorama

de Baja California

LA "NARCOLISTA"

EL MIEDO CON NOMBRES Y CARGOS



Sheinbaum lo niega, pero medios de E.U. insisten en que la **"narcologista"** existe... y dan nombres

Alejandra Ang y la crisis de credibilidad del Congreso de BC

Pag. 11

Juicio por Angelita León: el Estado en el banquillo

Pag. 18

Valle de Mexicali, un cementerio a cielo abierto

Pag. 25

índice

EDITORIAL

La Narcolista... el miedo con nombres y cargos Por Marco Antonio Blásquez	3
Baja California en crisis: Cuando los tres poderes están bajo sospecha Por Minerva Hernández	5
Dinero, frontera y poder Por Humberto Peña	8
Nuevo orden internacional Por Ramón Castorena	11
Economía de casino y desprecio fiscal: el triunfo de los megarricos Por Espartaco Buentiempo	10
Justicia para Angelita León Por Isis Kin	12
Del marro y el cincel, a la colección de rolex: Por Marco Antonio Blásquez	18
La Polarización en México Por Meli Espinosa	21
Sombras en el Valle: La segunda intervención en el ejido Miguel Alemán Por Minerva Hernández	23
Mentiras, Mentiras Por Ramón Quiñonez	25
	27

DIRECTORIO

Director General
Lic. Juan Arturo Salinas

Director Editorial
Humberto Peña Cano

Apoderado Legal
Lic. Héctor de Isla Puga

Gerente de Ventas
José F. Carbajal

Diseño Gráfico
Santiago Morales

Titular de Redes
Mtro. Mauro A. Ramírez

REVISTA PANORAMA DE BAJA CALIFORNIA Cuarta Época, Número 37, febrero de 2026, es una publicación mensual de circulación pagada, editada y publicada por Media Sport de México, SA de CV, ubicada en Av. General Ferreira No. 3250, colonia Madero Sur, Tijuana, Baja California, CP 22000. Tel (664) 972-7263. Editor responsable: Licenciado JUAN ARTURO SALINAS PACHECO. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2022-061010492800- 102. Certificado de Licitud de Título y Contenido: en trámite. Registro en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación: en trámite.

COLABORADORES

Marco Antonio Blásquez
Juan Arturo Salinas
Espartaco Buentiempo

Xavier Barba
Meli Espinoza
Ramón Castorena

Isis Kin
Minerva Hernández
Humberto Peña

REVISTAPANORAMA.NET

OFICINAS GENERALES
Av. General Ferreira, No.3250
Col. Madero Sur
Tijuana, B. C., CP 22000
Tel. 664 972-7723

OFICINAS TECATE
Blvd. Benito Juárez, NO. 500-2B
Plaza Cuchumá, Col. Bella Vista
Tecate, B. C., CP 21440
Tel.665 654 0592



Editorial

En México, la soberanía ha sido un principio histórico de defensa frente a presiones externas. Pero hoy corre el riesgo de convertirse en pretexto para encubrir la corrupción. Ante las versiones persistentes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca llevar ante la justicia a políticos mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado, el debate real no debería ser diplomático, sino ético: ¿por qué resulta creíble que un país extranjero investigue lo que México no ha querido investigar?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha negado la existencia de cualquier exigencia formal. Sin embargo, la negación no borra una realidad incómoda: la impunidad acumulada durante años ha debilitado la confianza en las instituciones. Cuando medios internacionales hablan de investigaciones abiertas contra figuras del poder, el problema no es que lo publiquen, sino que nadie pueda desmentirlo con autoridad moral.

Hay que decirlo sin rodeos: si México no investiga a sus propios corruptos, no puede escandalizarse si otro país lo hace. La soberanía no es licencia para delinquir ni escudo para proteger redes de huachicol, narcotráfico o trata de personas. Usarla como defensa automática equivale a confundir patriotismo con complicidad.

El poder político ha sido un salvoconducto penal. Gobernadores intocables, funcionarios blindados, expedientes congelados. Ese vacío de justicia interna es el que abre la puerta a la justicia externa. No es intervención: es consecuencia.

La verdadera humillación nacional no es que existan investigaciones en Estados Unidos. La humillación es que no se hayan hecho aquí. La soberanía auténtica no se proclama en discursos; se ejerce cuando el Estado castiga a quienes traicionaron la confianza del pueblo.

Defender la soberanía para proteger a corruptos monstruosos no fortalece al país: lo degrada. Y un Estado que tolera la impunidad desde el poder pierde el derecho de indignarse cuando la justicia cruza la frontera.

Atentamente,

*Lic. Juan Arturo Salinas
Director General*

NOTICIERO AL DÍA



GABY COLINA
6:00 PM - 7:00 PM
9:00 PM - 10:00 PM

Manténgase informado todos los días con
nuestras dos emisiones del **NOTICIERO AL DÍA**

A TRAVÉS DE



LA "NARCOLISTA"...

EL MIEDO CON NOMBRES Y CARGOS

SHEINBAUM LO NIEGA, PERO MEDIOS DE E.U. INSISTEN EN QUE LA "NARCO LISTA" EXISTE... Y DAN NOMBRES

Por Marco Antonio Blásquez



Dos versiones de una presunta lista (una de 15 nombres y otra más reducida) colocan en el centro del debate a la narcopolítica, mientras el silencio oficial contrasta con reportes de investigaciones activas en Estados Unidos que mantienen en vilo a las élites políticas.

En los pasillos del poder mexicano, donde el silencio suele ser un mecanismo de supervivencia, hoy domina una palabra que nadie se atreve a pronunciar en voz alta: extradición. El rumor (persistente, documentado y políticamente explosivo) apunta a una supuesta exigencia directa del presidente de Estados Unidos,

Donald Trump, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: entregar una "narcologista" con nombres de políticos mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado para ser enjuiciados en cortes federales estadounidenses.

La versión oficial mexicana ha sido clara y tajante: no existe tal exigencia. Sheinbaum lo ha negado públicamente, subrayando que la cooperación bilateral se mantiene dentro de los cauces institucionales y del respeto a la soberanía. Sin embargo, fuera de México (y particularmente en Washington) el tema no se

ha disipado. Por el contrario, se ha consolidado como una narrativa recurrente en medios de alto peso informativo como Fox News, Reuters, The New York Times y The Wall Street Journal.

El contraste entre la negación oficial y la insistencia mediática ha provocado un nerviosismo inédito entre élites políticas, empresariales y militares presuntamente relacionadas con el huachicol, el tráfico de drogas, el tráfico de personas e incluso el tráfico de órganos, una actividad criminal que, aunque difícil de documentar públicamente, aparece con frecuencia en expedientes de inteligencia transnacional.



Imagen cortesía

DOS LISTAS, UNA AMENAZA

Las versiones que circulan en círculos diplomáticos y de seguridad describen dos escenarios. El primero, más amplio y explosivo, habla de una lista de **15 “narcopolíticos”**: gobernadores, exgobernadores, altos mandos de seguridad, operadores financieros y enlaces políticos con organizaciones criminales. El segundo, aparentemente más “quirúrgico”, reduce la nómina a **cuatro figuras clave**: dos gobernadores (sin especificar género ni entidad), un general de alto rango y un legislador federal.

La diferencia entre ambas listas no reduce el impacto político; lo multiplica. En ambos casos, el mensaje es el mismo: Estados Unidos ya no estaría dispuesto a tolerar la impunidad estructural que, desde su perspectiva, permite que redes criminales operen con protección institucional al sur de la frontera.

INVESTIGACIONES QUE NO NECESITAN PERMISO

Una de las claves que explica el pánico en ciertos sectores es jurídica y no política. Estados Unidos no necesita autorización del gobierno mexicano para investigar. Bajo figuras como conspiración para traficar drogas, lavado de dinero, delincuencia organizada transnacional o apoyo material a organizaciones terroristas (una categoría que Trump ha insinuado aplicar a ciertos cárteles), las fiscalías federales estadounidenses pueden abrir carpetas, emitir órdenes de arresto y solicitar detenciones internacionales.

De acuerdo con versiones coincidentes en Washington y en agencias de inteligencia privadas, **al menos 10 políticos mexicanos ya tendrían investigaciones abiertas en Estados Unidos**. No se trataría de expedientes incipientes, sino de casos con años de segui-

miento financiero, escuchas indirectas, testigos colaboradores y cruces bancarios.

Aquí radica el verdadero temblor: **no es necesaria una “narcolista” formal si los nombres ya figuran en expedientes judiciales**.

EL PRECEDENTE QUE NADIE QUIERE MENCIONAR

En América Latina existen antecedentes que explican el miedo. Presidentes, ministros y generales de otros países han sido detenidos fuera de su territorio, trasladados a Estados Unidos y juzgados sin que sus gobiernos pudieran impedirlo. El mensaje de Trump (explícito o implícito) es que México no sería la excepción.

En este contexto, las versiones sobre operativos encubiertos, detenciones sorpresivas en terceros países o incluso capturas discretas en territorio mexicano –hipótesis que el gobierno niega categóricamente– han alimentado un clima de paranoia entre quienes se saben vulnerables.

No es casual que algunos políticos hayan reducido viajes internacionales, modificado rutinas de seguridad o reforzado equipos legales en Estados Unidos. Tampoco lo es que despachos de abogados en Nueva York, Texas y California reporten un aumento inusual de consultas provenientes de México.

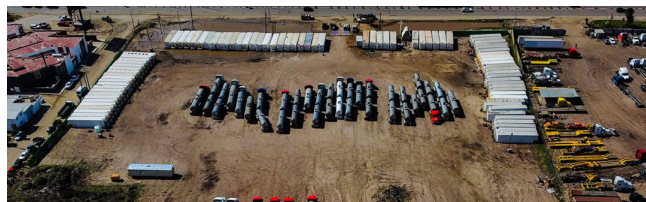


Mario Delgado, bajo la lupa

HUACHICOL, DROGAS... Y ALGO MÁS

Aunque el narcotráfico sigue siendo el eje central, fuentes de seguridad señalan que **el huachicol fiscal y energético** —el robo, contrabando y evasión de impuestos en combustibles— se ha convertido en una prioridad para agencias estadounidenses por su impacto directo en empresas y mercados norteamericanos.

A ello se suma el tráfico de personas, particularmente de migrantes, donde la línea entre crimen organizado y colusión institucional se vuelve difusa. El tema más sensible (y menos documentado públicamente) es el tráfico de órganos, una acusación que, aunque rara vez llega a tribunales, sí aparece en reportes de inteligencia como actividad vinculada a redes criminales con protección local.



Huachicol, la ruta rápida de la corrupción en México

LA NEGACIÓN COMO ESTRATEGIA POLÍTICA

Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, reconocer la existencia de una exigencia formal sería admitir una crisis diplomática de alto calibre. Negarla, en cambio, permite ganar tiempo, contener mercados y evitar un colapso político interno. Sin embargo, la narrativa internacional sigue su propio curso, alimentada por filtraciones, declaraciones off the record y una Casa Blanca que, bajo Trump, prefiere la presión pública al diálogo discreto.

El dilema es evidente:

Si la lista no existe, ¿por qué el temor?
Y si existe, ¿cuánto tiempo puede sostenerse el silencio?

UN PAÍS EN VILO

Más allá de nombres y versiones, el episodio revela una realidad incómoda: la frontera entre política y crimen organizado sigue siendo porosa. El solo hecho de que se considere posible una “narcolista” presidencial habla de una profunda desconfianza en las instituciones y de una relación bilateral marcada por la asimetría de poder.

Hoy, en oficinas gubernamentales, cuarteles, congresos locales y despachos privados, la pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuándo. Y si esas consecuencias llegarán en forma de expedientes judiciales, sanciones financieras, cancelación de visas o algo más drástico.

EL RELOJ CORRE

En Washington, los tiempos judiciales son lentos, pero inexorables. En México, la política suele apostar al desgaste mediático. Entre ambos relojes, los presuntos narcopolíticos tiemblan.

No por lo que se dice en público, sino por lo que ya estaría escrito en expedientes que no necesitan aplausos, conferencias ni desmentidos. Solo una firma, una orden y un traslado. Y entonces, la “narcolista” dejaría de ser un rumor para convertirse en historia judicial.



La espada de Damocles sobre el aparato político mexicano

BAJA CALIFORNIA EN CRISIS:

CUANDO LOS TRES PODERES ESTÁ BAJO SOSPECHA

Por Minerva Hernández

Baja California no enfrenta una crisis aislada ni pasajera. Vive una crisis institucional profunda, en la que los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— están bajo señalamientos graves de corrupción, omisión y sometimiento político. Cuando el sistema completo es cuestionado, la incertidumbre deja de ser percepción y se convierte en realidad.

EL PODER EJECUTIVO: EL SILENCIO QUE COMPROMETE

En el Ejecutivo estatal, las dudas no son menores. El vínculo de la gobernadora con su exesposo ha colocado al gobierno bajo un reflector incómodo: señalamientos por presuntos nexos con redes de huachicol, tráfico de armas y una permisividad que permitiría al crimen organizado operar con impunidad en Baja California.

Más allá de los nombres, lo verdaderamente alarmante es la falta de deslinde político y moral, el silencio institucional y la ausencia de explicaciones claras ante acusaciones que tocan temas de seguridad nacional. Cuando el Ejecutivo no aclara, no investiga y no rompe vínculos, la sospecha crece y la confianza ciudadana se erosiona.

EL PODER LEGISLATIVO: OBEDIENCIA, NO CONTRAPESO

El Congreso local tampoco escapa al descrédito. Lejos de funcionar como un verdadero contrapeso, ha seguido una línea política trazada desde el Ejecutivo, alineando decisiones, evitando incomodar y cerrando filas justo cuando el momento exige fiscalización.

El reciente caso de la diputada Alejandra Ang es ejemplo de ello: cuestionamientos públicos, polémicas y una narrativa de protección política que refuerza la percepción de que el Legislativo ya no legisla para la ciudadanía, sino para el poder que lo sostiene.

Mientras la inseguridad y la crisis social avanzan, el Congreso parece más preocupado por blindarse que por representar.



Un Estado que trabaja para blindarse,
no para dar resultados

EL PODER JUDICIAL: JUSTICIA EN ENTREDICHO

El Poder Judicial, último bastión de la legalidad, tampoco está exento de señalamientos. El caso de Jesús Enrique “N”, señalado como culpable del robo de 3 millones de pesos del entonces Desarrollo Social Municipal de Mexicali, ha detonado protestas y cuestionamientos ciudadanos, exhibiendo un sistema que muchos perciben como selectivo, lento y distante del ciudadano común.

A esto se suma el señalamiento que pesa sobre el presidente del Poder Judicial, Isaac Fragoso, mencionado en investigaciones y cuestionamientos públicos. Cuando quien encabeza la impartición de justicia es señalado, la credibilidad de todo el sistema se tambalea.

Si la justicia parece alineada al poder político, deja de ser justicia y se convierte en un trámite.



El pueblo queda de lado cuando la prioridad es defender los privilegios.

UNA CRISIS DE LEGITIMIDAD

Cuando el Ejecutivo calla, el Legislativo obedece y el Judicial es cuestionado, surge la pregunta inevitable: ¿dónde queda el ciudadano? ¿Quién garantiza que la ley se aplique sin favoritismos? ¿Quién protege a la sociedad cuando las instituciones se protegen entre sí?

Baja California no enfrenta únicamente una crisis de seguridad o gobernabilidad; enfrenta una crisis de legitimidad institucional. Mientras no existan deslindes claros, investigaciones reales y consecuencias visibles, la certeza para la ciudadanía seguirá siendo solo un discurso vacío.

Porque cuando los tres poderes están bajo sospecha, la democracia deja de funcionar y la impunidad se convierte en política de Estado.



El Estado queda desnudo ante la vista del pueblo.

TUDN

LA DEPORTIVA

1700 AM

EL PULSO DEL DEPORTE EN
BAJA CALIFORNIA

TRANSMISIONES EN VIVO • ANÁLISIS • NOTICIAS • CONTENIDOS EXCLUSIVOS

TUDN LA DEPORTIVA 1700 AM, LA ESTACIÓN #1 EN ESPAÑOL PARA
LOS AFICIONADOS EN BAJA CALIFORNIA Y EL SUR DE CALIFORNIA.

PROGRAMACIÓN DEPORTIVA CONTINUA

LOS MEJORES CONTENIDOS DE TUDN

SOCIOS OFICIALES
EN **ESPAÑOL** DEL



+

ANÚNCIATE EN DONDE VIVE LA AFICIÓN.
ANÚNCIATE EN TUDN LA DEPORTIVA 1700 AM.

DINERO, FRONTERA Y PODER

ALEJANDRA ANG Y LA CRISIS DE CREDIBILIDAD DEL CONGRESO DE BC

Por Humberto Peña



La mañana del 5 de enero, en el cruce fronterizo Mexicali–Calexico, un hecho administrativo detonó una de las controversias políticas más delicadas para el Congreso de Baja California en los últimos años. La diputada local de Morena, Alejandra María Ang Hernández, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, fue retenida durante varias horas por autoridades estadounidenses al intentar ingresar a Estados Unidos con una cantidad de dinero en efectivo superior al límite permitido sin declarar.

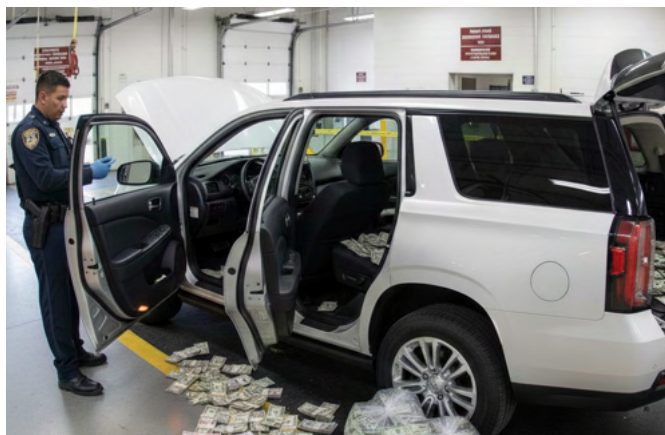
Aunque la legisladora no ha confirmado públicamente el monto exacto, diversos reportes periodísticos coinciden en que se trataría de alrededor de 40 a 45 mil dólares, equivalentes a aproximadamente 800 mil pesos mexicanos.

El dinero fue localizado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante una inspección a la camioneta GMC Yukon que Ang Hernández utiliza para actividades personales y parlamentarias. El efectivo fue retenido; su visa, según ha afirmado la propia diputada, no fue revocada.

Desde entonces, el caso ha escalado del ámbito administrativo a un conflicto político, ético e institucional, con repercusiones locales y nacionales.

LA VERSIÓN DE LA DIPUTADA: "UN ERROR ADMINISTRATIVO"

Horas después de que trascendiera el incidente, Alejandra Ang Hernández emitió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como un "error" y negó cualquier irregularidad en el origen del dinero. Aseguró que los recursos corresponden a ahorros personales, a los de su esposo, César Castro Ponce, regidor del Ayuntamiento de Mexicali y presidente del Consejo Político Estatal de Morena, así como a la venta de un vehículo.



Un "error" sin explicaciones.

“Son recursos de procedencia lícita. Estoy atendiendo el proceso administrativo para aclarar, documentar y recuperar el dinero de nuestra propiedad”, sostuvo.

En diversas declaraciones posteriores, la diputada insistió en que el caso es personal y administrativo, ajeno a su función como legisladora, y negó que exista hasta ahora resolución legal que acredite delito alguno.

No obstante, la condición de Ang Hernández como presidenta de la Comisión de Fiscalización, órgano encargado de vigilar el uso de los recursos públicos en el estado, colocó el caso en el centro del debate público.

LA REACCIÓN POLÍTICA: EXIGENCIAS DE SEPARACIÓN DEL CARGO

A los pocos días del incidente, los partidos de oposición en Baja California —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— exigieron la separación temporal de la diputada de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, en tanto se esclarece su situación con las autoridades estadounidenses.

Durante una sesión ordinaria del Congreso del Estado, fue presentada una proposición de acuerdo para exhortar a Ang Hernández a separarse del cargo. La iniciativa fue promovida por el diputado Juan Diego Echevarría y defendida en tribuna por la diputada María Yolanda Gaona Medina, quien argumentó que el caso trasciende lo personal.

“La presidencia de la Comisión de Fiscalización no admite sombras de duda”, sostuvo Gaona Medina, al señalar que la omisión de declarar divisas impacta directamente en la credibilidad y rigor ético del Congreso.

El exhorto planteaba, además, que la diputada presentara de manera pública la documentación que acreditara la procedencia y trazabilidad del dinero, incluyendo declaraciones patrimoniales y estados de cuenta. PAN y Movimiento Ciudadano anunciaron que darían seguimiento puntual a los procedimientos administrativos y legales relacionados con el caso.

Desde el PRI, su dirigente estatal, Álvaro Aldrete Gruel, expresó dudas sobre la explicación ofrecida por la legisladora y cuestionó la viabilidad de haber acumulado tal cantidad de dinero en efectivo. Afirmó que solicitarán información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional de Migración y la revisión de la declaración patrimonial de Ang Hernández, al considerar que pudo haber recibido un trato preferente.

MORENA CIERRA FILAS

En respuesta, la mayoría morenista en el Congreso rechazó la proposición. El exhorto fue desechado con 18 votos en contra y 7 a favor. La diputada presidenta de la Mesa Directiva, Liliana Michel Sánchez Allende, descartó que existan planes dentro de Morena para remover a Ang Hernández y pidió esperar a que concluya el proceso administrativo en Estados Unidos.

“Esto suele ser muy escandaloso, pero tampoco quiero hacer escarnio de una situación que aún no ha sido totalmente transparentada”, expresó.

La propia Ang Hernández defendió su permanencia en el cargo, calificó los señalamientos como una “sentencia política” y aseguró que la Comisión de Fiscalización es un órgano colegiado. “Seguiremos revisando cuentas y exigiendo explicaciones, le incomode a quien le incomode”, afirmó en tribuna.



El Congreso BC nada ve,
nada oye, nada sabe.v

LA VOZ PRESIDENCIAL Y EL IMPACTO NACIONAL

El caso alcanzó dimensión nacional cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada al respecto durante su conferencia matutina. Sin mencionar sanciones anticipadas, fue clara al señalar que la diputada debe dar explicaciones.

“Tiene que hacerse la investigación. Si hay un delito, tiene que ser investigado por la fiscalía”, afirmó, al tiempo que envió un mensaje general a los servidores públicos sobre la necesidad de conducirse con honestidad y “justa medianía”.

El pronunciamiento presidencial marcó un punto de inflexión: el tema dejó de ser únicamente un conflicto local para convertirse en un caso testigo sobre rendición de cuentas dentro de Morena.

LECTURAS POLÍTICAS Y FUEGO CRUZADO INTERNO

Paralelo al debate institucional, diversas columnas de opinión han planteado una lectura política del caso. Algunas sugieren que la detección del dinero pudo no ser una casualidad, sino el resultado de tensiones internas dentro de Morena, particularmente en el contexto de los reacomodos rumbo a la sucesión gubernamental de 2027.

Estas versiones apuntan al papel de César Castro Ponce en la movilización política reciente dentro del partido y a presuntos roces con otros grupos internos. Sin embargo, estas hipótesis permanecen en el terreno de la especulación política, sin evidencia pública que las confirme.

UN CASO ABIERTO

Más allá de interpretaciones, lo cierto es que el caso de Alejandra Ang Hernández sigue abierto en varios frentes: el administrativo en Estados Unidos, el político en el Congreso local y el ético ante la opinión pública. Hasta ahora, no existe resolución que determine responsabilidades legales, pero la controversia ha puesto bajo escrutinio no solo a la diputada, sino al funcionamiento de los mecanismos de control y congruencia institucional en Baja California.

En un estado marcado por la desconfianza ciudadana hacia la clase política, el desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre los límites entre lo personal y lo público, y sobre la disposición real de las instituciones para exigir cuentas incluso a quienes encabezan los órganos de fiscalización.



Un caso bajo la lupa del pueblo.

NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

Por Ramón Castorena



Nuestro mundo ya es otro. Previo al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, las grandes potencias —Estados Unidos, Rusia y China— delinearon las pinceladas de lo que le depara al planeta en los próximos años. Las potencias han marcado con claridad sus intereses y sus políticas económicas y comerciales; en los hechos, se observa una nueva repartición del mundo.

Se consolida el surgimiento de bloques de naciones que se agrupan para fortalecer sus economías, así como nuevas políticas de pago en el comercio internacional que operan al margen del dólar, entre otras transformaciones relevantes.

Todo detonó con el arribo de la administración Trump, que con una visión nacionalista y proteccionista sacudió el comercio mundial mediante la imposición de aranceles. A ello se sumó el sometimiento político de naciones como Venezuela y, como daño colateral, Cuba, que ha quedado en una situación de orfandad económica.

También se inscriben en este contexto la pretensión de anexar Groenlandia y la trampa en la que se encuentra el continente europeo, incapaz de definir políticas propias, prácticamente sometido a la voluntad de Estados Unidos y envuelto en una compleja relación con Rusia, su principal proveedor energético durante años.

Por otro lado, los BRICS han consolidado un fuerte bloque económico y político integrado por China, Rusia, India, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Turquía, Nigeria, Sudáfrica, entre otros.

Este bloque se ha fortalecido como consecuencia directa de los aranceles impuestos por Estados Unidos, logrando incluso operar parte de su comercio internacional al margen del dólar.

En nuestro continente, Estados Unidos ha retomado con seriedad la Doctrina Monroe, cuyo lema es “América para los americanos”, reclamando la supremacía norteamericana sobre la región mediante el control del comercio, territorios, mares, cielos y la alineación política de países considerados aliados, como El Salvador, Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Los países catalogados como “enemigos” o no sometidos son Colombia, Cuba y Nicaragua, además de aquellos con signos de “rivalidad”, entre ellos México, Brasil y Chile.

En el horizonte se asoman más tormentas políticas y económicas, conflictos territoriales, incertidumbre generalizada, miedo en la población y una crisis macroeconómica de dimensiones colosales.

México se muestra firme en su definición de mantenerse como el principal socio comercial de Estados Unidos, pese a las presiones políticas y a la pretensión de una intervención militar contra los cárteles de la droga. El manejo de la política internacional mexicana se basa en el respeto, la diplomacia y la cooperación, con la soberanía como carta de presentación.

De la ONU, del invento de la guerra en Ucrania y del enredo europeo, ni qué decir.

ECONOMÍA DE CASINO Y DESPRECIO FISCAL: EL TRIUNFO DE LOS MEGARRRICOS

Por Espartaco Buentiempo

El más reciente informe de Oxfam (el Comité de Oxford para Aliviar la Hambruna) es un golpe directo a la conciencia pública y a cualquier pretensión de racionalidad económica. Durante 2025, la fortuna de los llamados megarrricos creció un 200 por ciento más rápido que en cualquier otro año de la última década. No se trata de una cifra anecdótica ni de una provocación retórica, sino de la radiografía precisa de un sistema económico global estructurado para el despojo.

Mientras miles de millones de personas vieron erosionado su poder adquisitivo por la inflación, los recortes salariales y la precarización laboral, el club del uno por ciento incrementó su riqueza a una velocidad obscena, consolidando monopolios y evadiendo obligaciones fiscales con una impunidad que ya ni siquiera se disimula.

En México, esta lógica no requiere intermediarios ni informes internacionales para ser comprendida. Basta observar casos emblemáticos que condensan la voracidad del modelo. El de Ricardo Salinas Pliego es paradigmático. Con una deuda fiscal que ronda los 51 mil millones de pesos, el magnate ha recurrido durante años a intrincados laberintos legales para postergar el cumplimiento de una obligación elemental: pagar lo que debe. Esta conducta no es una excepción; es la expresión local de lo que Oxfam denomina una economía de casino, donde la riqueza no se produce mediante innovación social o generación de valor colectivo, sino que se extrae, se concentra y se blinda con ejércitos de abogados.



"Poderoso caballero es Don Dinero"



Una cúpula que se sostiene a sí misma.

El resultado es un Estado debilitado, incapaz de financiar servicios básicos, mientras una minoría privatiza las ganancias y socializa los costos.

Este ejemplo nacional forma parte de un engranaje global mucho más amplio. El mismo patrón se reproduce en los grandes centros de poder económico, como Silicon Valley, donde un reducido grupo de barones tecnológicos y de la industria de la inteligencia artificial acumula fortunas astronómicas sin una contribución fiscal proporcional. Sus plataformas reconfiguran el mercado laboral, automatizan empleos y empujan a millones de personas a la incertidumbre, cuando no al desempleo abierto, sin que exista un contrapeso estatal efectivo.

Lo verdaderamente alarmante es la facilidad con la que este poder económico se traduce en poder político.

No es casual que figuras como Donald Trump, con un historial consistente de políticas favorables a los ultra-ricos, encuentren en estos círculos a sus aliados más leales. Su agenda de desregulación y reducción de impuestos no es una anomalía ideológica: es la consecuencia lógica de un sistema diseñado para servir al uno por ciento. El servilismo político frente a los intereses de las grandes fortunas no es un accidente; es una regla no escrita del orden económico actual.



La coronación del Nuevo Orden.

La concentración extrema de la riqueza no es únicamente un problema de justicia social. Es una amenaza directa a la democracia. Cuando el poder económico se fusiona con el poder político, la voz de la mayoría se diluye hasta volverse irrelevante.

La salida, como bien señala Oxfam, no pasa por la caridad ni por gestos simbólicos, sino por una justicia fiscal real, de alcance global; por Estados capaces de cobrar lo que se debe, y por liderazgos que no actúen como peones de los megarricos. La factura de la desigualdad ya llegó, y es el uno por ciento quien debe pagarla, no —como siempre— el resto de la sociedad.



La ruta de los megarricos.



UNA ESTACIÓN
PARA LA GENERACIÓN
SIN PRISA

PROGRAMACIÓN EN VIVO • LOCUTORES CERCANOS • POP Y ROCK EN ESPAÑOL

SUAVE 105.7 FM LLEGA DIRECTO AL CORAZÓN DE UNA AUDIENCIA MADURA, ESTABLE Y CON PODER DE DECISIÓN.

AUDIENCIAS DE
35 A 60 AÑOS

CONSUMIDORES CON PODER ADQUISITIVO
ESCUCHA **ACTIVA EN CASA**, EN EL **TRABAJO** O AL **VOLANTE**

TU MARCA NECESITA SONAR
DONDE HAY **CONEXIÓN REAL**

LLEGA A TU PÚBLICO
EN SUAVE 105.7 FM

JUSTICIA PARA ANGELITA LEÓN

EL INICIO DEL JUICIO QUE EXPONE LA
VULNERABILIDAD DE LAS BUSCADORAS
EN BAJA CALIFORNIA

POR ISIS KIN

En **Tecate**, el eco de los disparos que acabaron con la vida de Ángela León en 2024 aún resuena como un recordatorio de la vulnerabilidad extrema de quienes buscan a sus desaparecidos en México.

Hoy, con el inicio del juicio oral, el caso de la presidenta del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate deja de ser una cifra más en la estadística de homicidios para convertirse en un expediente que cuestiona directamente la eficacia de los mecanismos de protección estatal y la voluntad política de las autoridades.

El juicio, que contempla la comparecencia de 40 testigos, no solo busca castigar a los autores materiales, sino también exhibir una cadena de negligencias que dejaron a una activista que pidió ayuda durante años silenciada en su propio lugar de trabajo.

EL NACIMIENTO DE UNA LUCHA: DE LA TRAGEDIA PERSONAL AL ACTIVISMO PÚBLICO

La historia de Angelita (como cariñosamente la llamaban) no comenzó en las fiscalías ni en los campos de búsqueda, sino en los hogares destrozados por la violencia. En 2018, la desaparición de su hermano, Juan José León, cambió su vida para siempre. Ante la falta de respuesta de las autoridades, Ángela decidió no esperar más.

Se sumó y posteriormente encabezó el colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos

Tecate, convirtiéndose en la voz de decenas de familias que compartían su dolor. Durante seis años escaló montañas, investigó denuncias anónimas, confrontó a funcionarios y localizó restos humanos que brindaron paz a algunas familias, pero que también incomodaron a grupos criminales de la región.

“Esto se desató desde que desapareció mi hermano”, relata su hermana, Tania León. “Ella exigía que el gobierno hiciera su trabajo, pero ante la falta de respuesta, nos tocó actuar como familia, aún sabiendo que eso significaba sumar enemigos”. Ese “salir al frente” terminó convirtiéndose en la sentencia de muerte de la activista.



El dolor de una pérdida

CRÓNICA DE UNA NEGLIGENCIA INSTITUCIONALIZADA

Uno de los aspectos más dolorosos del caso es la reiterada omisión de las autoridades frente a las amenazas que Ángela denunció. De acuerdo con familiares y compañeros de lucha, la buscadora no solo intuía el peligro: sabía que estaba amenazada y contaba con pruebas por escrito.

Ángela León denunció en múltiples ocasiones amenazas de muerte vinculadas directamente con su labor. Sin embargo, la respuesta estatal fue insuficiente en el mejor de los casos, y inexistente en el peor. La familia sostiene que se le negó una protección efectiva, minimizando la gravedad del riesgo que enfrentaba.

Olivia Márquez, integrante del Colectivo de Búsqueda de Baja California y compañera de lucha de Ángela, ha sido una de las voces más críticas del mecanismo de protección. Durante las audiencias preliminares, Márquez evidenció las fallas técnicas del sistema:

“Se le proporcionó el mecanismo estatal, un ‘botón de pánico’ que no funcionaba. Ella lo presionaba, ya fuera para probarlo o en momentos de angustia, y la policía nunca llegaba. Era un elemento de simulación, no de protección real”, denunció.

Un día antes de su asesinato, el temor de Ángela alcanzó su punto máximo. Contactó a otros líderes de colectivos para advertirles que sentía que su tiempo se agotaba y que las amenazas estaban por cumplirse. Aun con esta última alerta, el sistema judicial no reaccionó.



Colectivos en busca de la esperanza.

EL IMPACTO EN EL TEJIDO SOCIAL DE TECATE

En 2024, la violencia alcanzó el lugar donde Ángela trabajaba: un salón de belleza que representaba su intento por llevar una vida normal mientras continuaba la búsqueda de su hermano. El asesinato a tiros en un espacio cotidiano envió un mensaje de terror a su familia y a los colectivos de todo Baja California.

Inicialmente, el caso fue presentado por algunos sectores oficiales como un posible “asunto personal”, una narrativa recurrente que tiende a minimizar o criminalizar el activismo de las víctimas. Sin embargo, la presión de los colectivos y la evidencia recabada orientaron el juicio hacia la relación directa entre el crimen y su labor como buscadora.

El asesinato de Ángela tuvo un efecto paralizante. Otros colectivos, temiendo correr la misma suerte, modificaron sus protocolos, extremaron precauciones o incluso suspendieron temporalmente las búsquedas. “El asesinato de Ángela paralizó el trabajo; ahora todos tenemos miedo”, coinciden integrantes de distintos colectivos del estado.



Replegados ante el miedo.

TRAS LA PISTA DE LOS AUTORES INTELECTUALES

El inicio del juicio representa un avance, pero para la familia León la justicia sigue incompleta. Aunque existen dos personas detenidas y procesadas, la exigencia central es que se identifique y capture a los autores intelectuales

La familia y la defensa sostienen que los detenidos son solo eslabones dentro de una estructura criminal más amplia. “Exigen que no se permita que el agresor continúe destruyendo hogares como el de Ángela”, señala el reporte de la primera jornada del juicio. El temor es que el caso se cierre con responsables menores, mientras los verdaderos autores permanecen en libertad.

El desfile de 40 testigos busca reconstruir una línea de tiempo que vincule las amenazas previas, la omisión policial y la ejecución del crimen. La familia exige al gobierno de Baja California que no vuelva a fallarles, porque la primera falla (no proteger su vida) es irreparable.



Grupos de búsqueda en alerta.



Las búsquedas de desaparecidas no cesan

UNA DEUDA MÁS ALLÁ DEL JUICIO

El caso de Ángela León recuerda que en México la búsqueda de personas desaparecidas es una actividad de alto riesgo que el Estado no ha sabido —o querido— proteger. La “tragicomedia burocrática”, como algunos activistas describen el proceso para solicitar protección, volvió a cobrar una vida.

Más allá de la sentencia que emita el tribunal, queda pendiente la pregunta que Ángela formuló desde 2018: ¿dónde está Juan José León? La búsqueda continúa, ahora sin la mujer que la impulsó con mayor fuerza.

“La sociedad de Tecate y los colectivos de todo el estado estamos alertas”. Justicia para Angelita no significa solo condenas penales, sino transformar un sistema de protección que hoy falla, para que ninguna otra buscadora tenga que presionar un botón de pánico que nadie atiende mientras su vida corre peligro.

DEL MARRO Y EL CINCEL, A LA COLECCIÓN DE ROLEX:

LA MUTACIÓN DEL HUACHICOL

Por Marco Antonio Blásquez

Durante años, el huachicol fue visto como una actividad artesanal, marginal y brutalmente peligrosa. Se practicaba en la penumbra de bodegas improvisadas (almacenes de tiliches) por personajes sin respaldo técnico ni político, que se jugaban la vida perforando ductos, inhalando vapores letales o provocando explosiones. Sus ganancias eran mínimas; sus castigos, inmediatos. Cuando eran sorprendidos, perdían la libertad y lo poco que tenían. El riesgo era personal, directo y casi siempre fatal.

Hoy, ese retrato pertenece al pasado. El huachicol mutó. Transitó del marro y el cincel al contrato, la factura y la aduana. Dejó de ser un delito de subsistencia para convertirse en un negocio de cuello blanco: sofisticado, transnacional y blindado por redes de poder. El huachicol ya no se roba solamente del ducto; se evade en impuestos, se disfraza en importaciones, se lava en balances y se protege con influencias.

La diferencia es abismal. Mientras los huachicoleros artesanales corrían el riesgo de ser quemados o asfixiados, los “huachicoleros prime” operan con trajes, despachos y escoltas. Aun denunciados, pueden viajar por el mundo, organizar eventos sofisticados, financiar campañas y mantener intacta su honorabilidad ciudadana.

La impunidad no es un accidente: es el modelo de negocios.

Este tránsito del delito oscuro al delito elegante atrajo a políticos, empresarios de relieve y militares de alto rango. No por ignorancia técnica, sino por cálculo. El huachicol fiscal (la evasión sistemática del IEPS y del IVA mediante subvaluación, triangulación y falsas clasificaciones) ofrece márgenes enormes con riesgos penales mínimos cuando se cuenta con protección institucional. El crimen dejó de oler a gasolina; ahora huele a papel sellado.

Los expedientes existen. Los nombres también. El caso del empresario Sergio Carmona Angulo, asesinado en 2021, quedó asociado (según investigaciones periodísticas y señalamientos de autoridades) a redes de contrabando de combustibles y financiamiento político.

A nivel corporativo, empresas energéticas internacionales han reconocido prácticas irregulares y han pagado multas millonarias en tribunales extranjeros; baste recordar a Vitol, sancionada por esquemas de corrupción y sobornos en el comercio de combustibles. No son anécdotas: son patrones.

El huachicol fiscal prospera donde la frontera es porosa, la aduana es capturable y la política es rentable. Se alimenta de declaraciones falsas, importaciones maquilladas como “aditivos” o “mezclas”, y de una cadena de complicidades que comienza en el puerto y termina en la gasolinera. El daño es doble: se vacían las arcas públicas y se distorsiona el mercado, castigando al consumidor y premiando al tramposo.

Mientras tanto, el gobierno suele concentrarse en el huachicol “de ducto”, más visible y fotogénico. Es una estrategia cómoda: perseguir al eslabón débil mientras el eslabón fuerte firma cheques. El resultado es una justicia asimétrica: severa con el pobre, indulgente con el poderoso. Así, el delito cambia de piel, pero conserva su esencia.

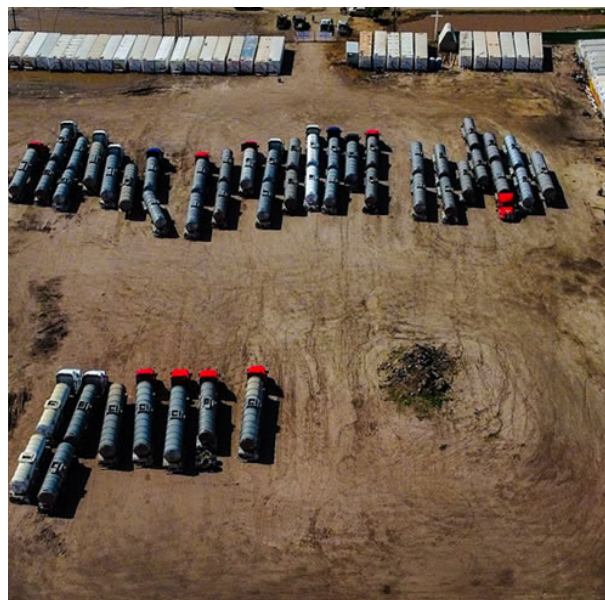
El huachicol no desapareció; se sofisticó. Y en esa sofisticación encontró su mejor blindaje. El Estado que no entiende esta mutación combate sombras y deja intacto el corazón del negocio.

La conclusión es inevitable. La justicia llegará. Si no es desde dentro, será desde fuera; si no habla español, hablará otro idioma. Pero llegará. Porque los flujos financieros dejan rastro, las triangulaciones se documentan y las aduanas conectan jurisdicciones. Los “huachicoleos prime” podrán pasearse hoy con aura de respetabilidad, pero ningún traje es ignífugo frente a la ley.

Estamos seguros de que la justicia –sea de la nacionalidad o del idioma que sea– alcanzará sus vidas y los castigará ejemplarmente. Entonces quedará claro que el verdadero progreso no es convertir el delito en negocio elegante, sino cerrar el paso a la impunidad que lo hizo posible.



Un crimen que pasó de lo local a lo nacional.



Una estructura de corrupción.

LA POLARIZACIÓN EN MÉXICO:

EL PAPEL DE LOS MEDIOS Y LAS REDES SOCIALES

Por Meli Espinoza

La forma en que los medios de comunicación y las redes sociales presentan la información ha contribuido de manera significativa a la polarización política en México. Al enfatizar las diferencias y promover la confrontación, se ha generado un ambiente de división y desconfianza.

Las redes sociales, en su afán por crecer y captar audiencia, recurren con frecuencia al sensacionalismo y al clickbait.

El clickbait es una técnica de contenido digital que utiliza titulares sensacionalistas, preguntas intrigantes o imágenes exageradas para generar una curiosidad irresistible y llevar al usuario a hacer clic en un enlace. A menudo promete información impactante que no se cumple o resulta de baja calidad, con el objetivo de aumentar el tráfico web y los ingresos publicitarios.

El término se traduce literalmente como “carriada para clics” y prioriza la cantidad de visitas por encima de la veracidad.

Esta práctica ha llevado a que muchos medios busquen atraer audiencia mediante titulares engañosos, amplificando las noticias más extremas y contribuyendo a la distorsión del debate público.

- En muchos casos, las redes sociales crean entornos donde solo se consume información que refuerza las creencias propias.
- Los políticos utilizan estas plataformas para promover un lenguaje divisivo y movilizar a sus seguidores.
- Si se busca cambiar esta forma de comunicación, es fundamental abordar el fenómeno de la polarización.

Para ello, resulta crucial promover un periodismo responsable y fortalecer la alfabetización digital, de modo que se fomente el pensamiento crítico, la verificación de la información y la escucha activa.



CUARTO PODER

CONducido POR:
Rosa Elena Moreno



EL PROGRAMA QUE FIJA LA LÍNEA EDITORIAL DE
PRIMER SISTEMA DE NOTICIAS

LUN-MIE-JUE-VIE DE 7:00 PM A 9 :00 PM

SINTONÍZALO A TRAVÉS DE:



664 972-7723

/EnVivoPSN

www.psn.si

SOMBRAS EN EL VALLE: LA SEGUNDA INTERVENCIÓN EN EL EJIDO MIGUEL ALEMÁN

Por Xavier Barba

El hallazgo de nuevas fosas clandestinas en Mexicali vuelve a poner a prueba la capacidad forense del Estado y revela la posible colusión de fuerzas policiales en la desaparición forzada de personas.

NUEVAS FOSAS, MISMA ZONA: EJIDO MIGUEL ALEMÁN

La persistente mancha de las desapariciones en Baja California exige más que promesas. La intervención en el Valle de Mexicali funciona como un termómetro de la crisis forense y de la fractura social que asfixia a la región fronteriza. No es la primera vez que se habla de fosas clandestinas y de personas desaparecidas, mientras colectivos de búsqueda realizan trabajo de campo, muchas veces sin el acompañamiento pleno de las autoridades.

A principios de mes inició la segunda intervención en la colonia Miguel Alemán. Se localizaron diez nuevos puntos de inhumación clandestina, situados en un área distante de los hallazgos registrados previamente en este mismo predio, así lo confirmó la fiscal María Elena Andrade en la más reciente rueda de prensa realizada en la capital del estado.

Con base en los datos dados a conocer por la fiscal, se concluye que este terreno ha sido utilizado de forma recurrente para fines delictivos, revelando un patrón geográfico desolador. La vulnerabilidad de las zonas rurales ha permitido que el crimen organizado convierta el valle en un cementerio clandestino, amparado por el silencio.

De acuerdo con los reportes preliminares en campo y los primeros detalles forenses, los verdugos separaron las fosas por apenas 10 o 15 metros. Esta disposición física, sumada a la presencia de restos de madera quemada, evidencia una metodología de ocultamiento sistemática que hoy desafía la capacidad técnica de los peritos estatales.

EL DESAFÍO FORENSE: CIENCIA FRENTE A LA BARBARIE

La ciencia se ha convertido en la última trinchera contra la impunidad. Un equipo multidisciplinario trabaja para dignificar a las víctimas, transformando osamentas en pruebas jurídicas irrefutables que permitan romper el ciclo de barbarie que impera en el estado.

En palabras de la fiscal de Baja California, actualmente se cuenta con mayores recursos y personal para atender sin contratiempos las búsquedas en campo.

En el caso específico del Ejido Miguel Alemán, el procesamiento del sitio involucra a especialistas de diversas disciplinas:

- Siete criminalistas de campo para la inspección técnica.
- Una arqueóloga dedicada a la recuperación científica de los restos.
- Un odontólogo forense encargado del análisis dental.
- Un perito en balística para el estudio de indicios.
- Treinta y tres genetistas enfocados en el procesamiento de ADN.

Para abatir el rezago histórico, la Fiscalía General contrató a 30 nuevos genetistas, sumando un total de 33 expertos. Este refuerzo institucional busca procesar tanto los hallazgos actuales como los expedientes que durante años permanecieron rezagados en los archivos estatales.

La denominada “acción térmica” complica el proceso. Los criminales utilizaron fuego directo y madera para calcar los cuerpos, dejando restos óseos severamente reducidos. Esta degradación intencional exige un manejo forense extremadamente delicado para lograr la extracción de material genético útil.

Este complejo rompecabezas científico debe traducirse en nombres y apellidos. La recuperación de restos en campo es solo el preámbulo de una batalla legal para identificar a las víctimas y castigar a los responsables de estas atrocidades.

QUINCE RESTOS HUMANOS, SEIS POSIBLES COINCIDENCIAS GENÉTICAS

La transparencia sigue siendo una deuda pendiente con los colectivos de búsqueda. Para la titular de la Fiscalía General del Estado, el manejo ético de la información es clave para reconstruir una confianza que, en muchos casos, se ha visto erosionada.

Hasta ahora, puntualizó María Elena Andrade, se han obtenido perfiles genéticos correspondientes a 15 restos humanos. Es importante aclarar que esto no equivale a 15 personas plenamente identificadas, ya que la fragmentación provocada por el fuego obliga a una validación científica rigurosa antes de confirmar cifras definitivas.

Existen seis coincidencias preliminares en la base de datos. El doctor Ramón Álvarez, director del Instituto de Ciencias Forenses, coordina la validación técnica que, de confirmarse esta misma semana, podría dar certeza sobre la identidad de estos seis individuos.



Un cementerio a cielo abierto

POSIBLE COLUSIÓN POLICIAL BAJO INVESTIGACIÓN

La fiscal general reconoció la posible participación de agentes policiales en estos crímenes. Hasta el momento, tres elementos de la policía municipal de Mexicali han sido detenidos, al contar con carpetas de investigación en las que se les vincula con actividades del crimen organizado, específicamente con la banda conocida como “los rusos” en el Valle de Mexicali, y posiblemente relacionados con el fenómeno de las desapariciones.

Esta acción, señaló la fiscal, busca enviar un mensaje claro: no habrá impunidad.

Por otro lado, la identidad de las posibles personas identificadas será notificada en primera instancia únicamente a sus familias y solo cuando exista sustento documental contundente, con el objetivo de evitar la revictimización mediante información preliminar o carente de rigor científico.



Una puerta giratoria de policías y ladrones

¿ME HAS VISTO?

AN GABINO CANELA MARTÍNEZ, ISAAC RAMIRO CANELA MARTÍNEZ, JOSÉ ALB
ODINA MACHUCA Y ÓSCAR ALBERTO PEREA GONZÁLEZ
 de 37, 27, 21 y 37 años de edad, al momento de su desaparición.

Fueron vistos por última vez, el 10 de julio del 2022, por la carretera al aeropuerto c
 Mexicali, Baja California

ción de Juan Gabino
 tinez alias Juan Carlos
 rtínez, Juan Carlos
 anela y Juan Carlos
 tinez: Estatura 1.75
 20 kilos

Media Filiación de Isaac Ramiro
 Canela Martínez: Tez morena,
 complexión delgada, 1.75 metros
 de estatura, ojos negros, cabello
 color negro y barba en el
 mentón.

Media Filiación de José Alberto
 Godina Machuca: Estatura 1.70
 metros, complexión delgada, tez
 morena clara y cabello corto color
 oscuro.

Media Filiación de Ósca
 Perea González: Esti
 metros, complexión d
 blanca y cabello color r
 Tatuajes: En el brazo

La lista de desaparecidos en BC crece

MENTIRAS, MENTIRAS

Por Ramón Quiñonez



Que el estado no está mal gobernado: **mentiras**.

Que se fue a España: **mentiras**.

Que cada fin de semana se aleja del estado: **mentiras**.

Que un avión con matrícula de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto de Tijuana y se niega: **mentiras**.

Que domina, manda y ordena a la mayoría de los diputados locales en el Congreso de Baja California: **mentiras**.

Nada más falta que el divorcio también resulte ser **mentira**.

Esto y muchos otros hechos irregulares están ocurriendo en este, mi querido estado de Baja California, hoy gobernado por gente incompetente y ambiciosa, a quienes para nada les importa el pueblo. Se dedican únicamente a malgobernar, a enriquecerse, mientras la ciudadanía observa (como el chinito) sin poder hacer nada.

En medio de este panorama, una voz valiente se alza: la presidenta de una asociación anticorrupción, quien exige la renuncia de la gobernadora, porque de gobernadora no tiene nada, pero sí ha dejado al estado en una situación desastrosa y plagada de corrupción.

En los 60 años que tengo la fortuna de vivir en esta ciudad y en este estado, jamás había visto un gobierno tan mal atendido y con un nivel de corrupción tan alto. Funcionarios elegidos y designados que llegaron únicamente para hacerse millonarios a costa del pueblo, empezando por la gobernadora y su ahora exesposo.

Ni siquiera en los tiempos del PAN, con Osuna, Kiko, Ramos y otros, se vivió una corrupción de esta magnitud. Imagínese, lector amigo, hasta qué grado hemos llegado.

Y por si queda alguna duda, estas son observaciones personales que hago sobre el mal **gobierno de Mary Pili**.

Mentiras. Mentiras. Mentiras.

Y te recuerdo, **Lupita D'Alessio**, tú sí eres franca y derecha.

Es cuanto.



La sala del trono.

CONOCE
LA PROGRAMACIÓN DE

EXPRESIÓN

45.2



LUNES A VIERNES

7-9 AM



LUNES A VIERNES

9-10 AM



LUNES A VIERNES

10 AM-12 PM



LUNES A VIERNES

12-2 PM



LUNES A VIERNES

2-3 PM



SÁBADOS

9 AM-10 AM

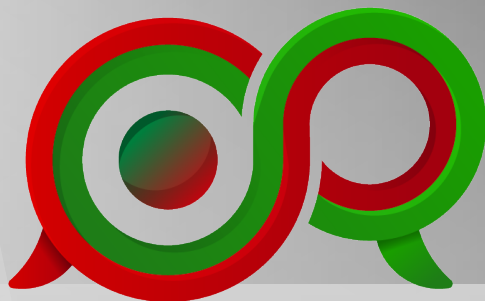


MIÉRCOLES

4 PM-6 PM

A TRAVÉS DE





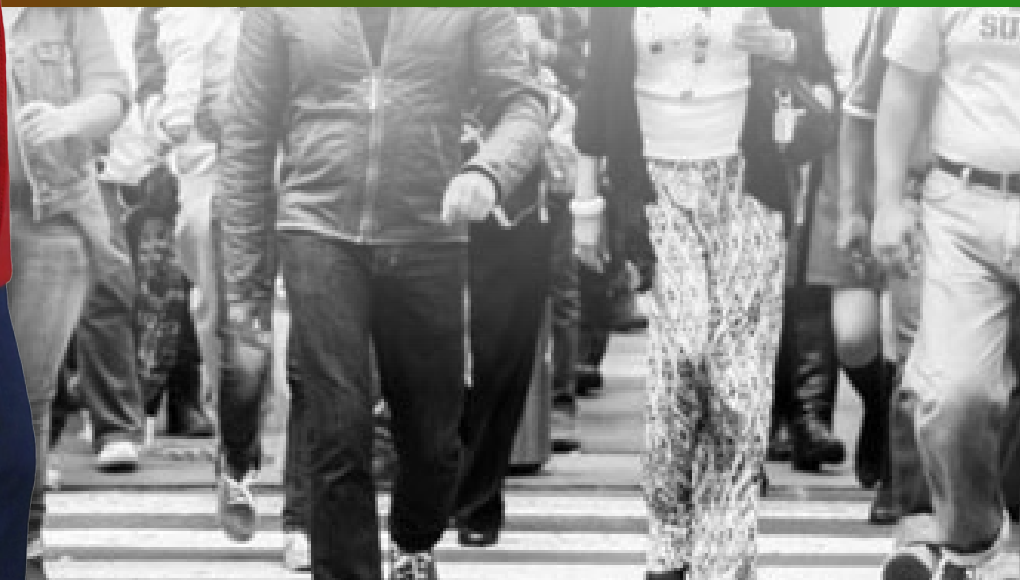
LOS COMUNICADORES DEL
PUEBLO

CON LA DAMA DE HIERRO
BLANCA PEDRAZA

UN PROGRAMA AL
SERVICIO DE
LA COMUNIDAD

SÁBADOS Y
DOMINGOS

2:00 PM - 4:00PM



AGENDA PÚBLICA 4P

CON MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ

UNA VOZ AUTORIZADA
PARA NAVEGAR UN MUNDO
SOBREINFORMADO



DOMINGOS

8:00 AM - 10:00 AM

